

REJAS VISIBLES E INVISIBLES

Presos políticos, muerte civil y consecuencias de la
erosión de la democracia

Hallazgos fundamentales

La encarcelación por motivos políticos constituye una herramienta clave para controlar la disidencia y va unida a la marcada erosión de la democracia. En estas épocas de tensión política, las sentencias de prisión, las detenciones y los procesos penales contra opositores del gobierno aumentaron repentinamente en seis países que recientemente han sufrido una notable decadencia de la democracia: Nicaragua, Tanzania, Tailandia, Túnez, Turquía y Venezuela. Aquellos que se convierten en objetivos de estas sanciones pueden permanecer tras las rejas durante largos períodos de tiempo, a la espera de que se dicte sentencia firme y les impide participar en oposición política, periodismo y defensa activa de los derechos humanos. Además del desgaste físico que estas medidas suponen, la prisión trae consigo una serie de consecuencias psicológicas y costos económicos que pueden llegar a afectar a todas las familias de los prisioneros.

Por cada preso político que se encuentra tras las rejas, otros opositores del gobierno se ven abocados a sufrir limitaciones más sutiles equivalentes a la “la muerte civil.” Los líderes antidemocráticos apuntan hacia los disidentes y críticos del gobierno, aplicándoles otras formas de represión que no les permiten hacer su trabajo ni participar normalmente dentro de la sociedad—esta condición es la que los expertos llaman “muerte civil.” Dentro de las tácticas de muerte civil se cuentan el control de viajes, el seguimiento físico, la inclusión en listas negras y la incautación de bienes. Las anteriores restricciones se suelen aplicar conjuntamente a actores tanto estatales como no estatales y pueden ocurrir por medios oficiales y no oficiales. Hemos observado una combinación de restricciones equivalentes a muerte civil en cada uno de los seis países estudiados.

El servilismo del poder judicial facilita el encarcelamiento político y la muerte civil a instancias de los regímenes autocráticos. Los líderes que logran el control del poder judicial pueden utilizar a los jueces como una poderosa herramienta de represión. Las personas elegidas como blancos de estas prácticas carecen de acceso a mecanismos cruciales, como presentar recursos o exigir responsabilidad, cuando el poder judicial actúa a favor de los intereses del ejecutivo. Los miembros del poder judicial con ideas independientes también se exponen a convertirse en objetivos de la persecución estatal y podrían ser destituidos de sus cargos y reemplazados por otros jueces leales al estado, lo cual erosiona aún más la institucionalidad.

Es esencial contrarrestar la prisión política y la muerte civil en la lucha por la libertad. La prisión política y la muerte civil empoderan a los líderes antiliberales e intolerantes en su intento por eliminar de la sociedad a sus críticos más vehementes y eficaces. Esta táctica puede ocurrir en países que han presenciado la erosión de la democracia, pero que no han llegado aún al extremo de los regímenes autoritarios. El monitoreo de las tácticas de encarcelamiento político y muerte civil, y el emprendimiento de acciones en su contra cuando exista, son cruciales para luchar contra el autoritarismo, al igual que el apoyo a los agentes del cambio democrático para evitar futuras oleadas de represión.

Introducción

*El estado no carece de imaginación cuando se trata de intimidar a la gente para que guarde silencio.*¹ –Activista social tanzano

Un líder de la oposición está tras las rejas, acusado de un sinnúmero de delitos falsos, supuestamente cometidos antes de las elecciones nacionales. Una adolescente fue acusada de difamación de la monarquía por cuanto abogaba por el cambio democrático en su país; además, se le prohíbe volver a sus estudios después de haber sido liberada de su detención bajo fianza. Un defensor de los derechos humanos, al intentar viajar al extranjero en busca de trabajo, se entera de que está bajo investigación por terrorismo y no se le permite viajar. Después de más de un año, uno de sus colegas sigue languideciendo en detención previa al juicio. Una juez es destituida de su cargo después de que el presidente de su país suspendió el parlamento; la pensión del estado a la que tenía derecho y su seguro de salud fueron congelados.

Estos son apenas unos pocos ejemplos de la forma en que los regímenes antidemocráticos impiden que sus oponentes, tanto reales como imaginarios, lleven una vida normal — los opositores incluyen defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos, líderes de la oposición, servidores públicos, desertores del gobierno, manifestantes y personas del común. La táctica más visible es la de los presos políticos, posiblemente encarcelados mediante procesos judiciales politizados y sentencias de prisión o medidas preventivas anteriores al juicio, que los mantienen detenidos durante meses o años antes de dictarles sentencia.

No obstante, por cada preso político que se encuentra tras las rejas, son muchos más los opositores y críticos del gobierno que afrontan restricciones más sutiles, es decir lo que algunos expertos llaman la “muerte civil.” Si bien el término tiene diferentes acepciones en los distintos campos de estudio,² Freedom House se centra en la muerte civil como un estado en el que los oponentes son privados de su capacidad de participar en la sociedad mediante una combinación de métodos represivos, dentro de los que se cuentan el control de viajes, la vigilancia física, la inclusión en listas negras y la incautación de bienes. En la práctica, tales métodos se pueden manifestar en prohibiciones de viajar y confiscación de pasaportes, en policías apostados fuera de sus domicilios con el fin de que los vecinos los vean, en dificultades para encontrar o conservar un empleo debido al estigma social o formar parte de una lista negra, en expulsión de la universidad, en incautación de bienes y en bloqueo de cuentas bancarias. Estos métodos también pueden estar relacionados con condiciones para ser liberados de la detención o encarcelación política, o se pueden imponer solos, a través de órdenes oficiales o mediante presión social. Los objetivos suelen estar expuestos a varios de estos métodos de manera simultánea, lo que produce una acumulación sofocante de efectos que les impide trabajar o llevar una vida normal.

La encarcelación política¹ y, hasta cierto punto, las tácticas represivas que producen la muerte civil, reciben mucha atención en regímenes con un largo historial de autoritarismo, como los son

¹ En este informe, se utiliza el término “Encarcelación política” como una forma corta de referirse a sentencias de prisión por motivos políticos, al igual que detenciones, juicios penales e investigaciones politizadas contra

China, Irán y Corea del Norte. Sin embargo, el uso de estas estrategias para castigar y silenciar a los opositores y críticos también es pronunciado en entornos que han sufrido una fuerte erosión de la democracia en épocas más recientes. A través de nuestra investigación, buscamos comprender de qué manera los aspirantes a líderes autocráticos, o los más recientes, reprimen a los opositores individuales y cómo tales métodos se manifiestan durante épocas de degradación de la democracia. En el presente informe analizamos estas dinámicas en seis países que sufrieron un marcado deterioro de la democracia en los últimos 20 años: Nicaragua, Tanzania, Tailandia, Túnez, Turquía y Venezuela.

El informe se basa en entrevistas con 42 expertos de los distintos países y lo complementamos con investigaciones de escritorio o *desk research*. Entre las personas que entrevistamos se cuentan actores de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, investigadores y académicos; varios de ellos han sufrido en carne propia la privación de la libertad por motivos políticos y algunos elementos de muerte civil. Las citas han sido editadas levemente para efectos de claridad.

La encarcelación política ha contribuido a controlar la disidencia en medio de un ambiente más amplio de erosión de la democracia en cada uno de los seis países bajo estudio. Además, observamos que las tácticas que contribuyen a la muerte civil—control de viajes, vigilancia física, inclusión en listas negras e incautación de activos—también ocurren en la totalidad de los seis países. La encarcelación política y las medidas de muerte civil han acompañado a los golpes contra el poder antidemocrático, las manifestaciones masivas contra el gobierno y las campañas electorales. Además, estas medidas se esgrimen en países que todavía deben ser más resolutivos con los sistemas autoritarios; su uso no comenzó cuando llegaron a lo más profundo del autoritarismo (algunos todavía están por llegar a ese nivel) sino más bien en momentos en que cada país había sido calificado como Parcialmente Libre o Libre en [Freedom in the World](#), el informe anual que publica Freedom House acerca de los derechos políticos y las libertades civiles. Encontramos que el encarcelamiento por motivos políticos y la muerte civil se dan en paralelo con la degradación de la democracia.

El riesgo de que se desplieguen estas tácticas contra los defensores más activos de la democracia, quienes luchan de manera incansable y valiente en muchos países del mundo donde existe erosión de la democracia, es serio y preocupante. Además de eliminar eficazmente a los opositores y disidentes de la sociedad, la prisión política y la muerte civil pueden tener efectos devastadores desde el punto de vista físico, psicológico y económico para las personas señaladas y sus familias. No obstante, la posibilidad de presentar recursos y exigir responsabilidad es limitada, puesto que los sistemas judiciales son flexibles y apoyan el confinamiento injusto y los mismos jueces se pueden convertir en objetivos si no acatan las normas.

“Cualquier tipo de herramienta que puedan utilizar para controlar la sociedad, la utilizan,” según afirmó Christopher Hernandez-Roy, director delegado y miembro y académico senior del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, quien ha documentado casos graves de abuso contra los derechos humanos en medio de la represión

opositores o críticos del gobierno, tanto reales como presuntos. “Opositor del gobierno” incluye críticos y aquellos que expresan su desacuerdo.

masiva que existe en Venezuela.³ Aun así, una amplia gama de actores sigue luchando valientemente contra el autoritarismo.

Rejas visibles: Encarcelación política en medio de una democracia en declive

*Capturaron a políticos famosos, líderes de partidos políticos, jueces y abogados. ¿Quién soy yo? Podría desaparecer y nadie oiría siquiera hablar de mí.*⁴ – Actor de la sociedad civil

Aunque las sentencias de prisión, las detenciones y los procesos judiciales ocurren en todo el mundo, su aplicación no se limita a los regímenes más duros y autoritarios. Estas tácticas están documentadas en lugares que viven muchas formas de erosión de la democracia, como se ilustra en cada uno de los seis casos que Freedom House analizó para llevar a cabo este estudio. Encontramos que la encarcelación surge en medio del desmantelamiento súbito o gradual de las instituciones democráticas y tiene un enorme impacto físico, psicológico y económico sobre los detenidos y las personas que los rodean.

Escalamiento de la prisión por motivos políticos

Arrebatarse el poder, inclusive mediante golpes de estado, suele ser característico de duras campañas de encarcelamiento político que elevan considerablemente los costos de desafiar los actos antidemocráticos. En Tailandia, un país plagado de golpes de estado,⁵ cientos de personas, inclusive políticos, periodistas y activistas, fueron detenidas bajo custodia militar después del más reciente levantamiento para tomarse el poder, ocurrido en 2014. Esta táctica normalmente se sostiene durante siete días y se conoce como “ajuste de actitud.”⁶ En Túnez, después de un considerable avance democrático en la década que siguió al derrocamiento de Zine el-Abidine Ben Ali, en julio de 2021 el presidente Kaïs Saïed suspendió el parlamento y en últimas lo disolvió al año siguiente, desmanteló las instituciones democráticas recientemente establecidas en el país y llevó a cabo un referendo constitucional que fortaleció el poder ejecutivo. Después de la toma del poder por parte de Saïed, al menos ocho líderes de los principales partidos de la oposición se encuentran detenidos a la espera de un juicio por cargos no comprobados de atentar contra la seguridad nacional. Periodistas y defensores de los derechos humanos han permanecido detenidos por infringir la nueva ley represiva de delitos cibernéticos, al igual que empresarios, abogados y otros que han sido acusados de delitos etéreos de “conspiración”.⁷

Así mismo, los golpes fallidos han fortalecido la erosión de la democracia, además de la prisión política. Después del intento de golpe de estado ocurrido en 2016, el presidente Recep Tayyip Erdoğan impulsó con éxito una reforma constitucional que convirtió a Turquía en un país gobernado por decretos presidenciales. Los nuevos poderes le han permitido a Erdoğan encarcelar y detener prácticamente a cualquiera que represente una amenaza: “Quienquiera que sea eficaz, es necesario perseguirlo,” según afirmó un actor turco de la sociedad civil.⁸ Dentro de las personas que se han visto sometidas a largos períodos de detención previa al juicio y a duras sentencias de cárcel se cuentan periodistas, miembros de la oposición y académicos.⁹

Algunos regímenes duraderos que no se han endurecido hasta el punto de convertirse en sistemas autoritarios también emplean la prisión política, aunque el número de detenidos varía con el tiempo. En Tanzania, en el año 2015, la victoria presidencial de John Magufuli, candidato del partido Chama cha Mapinduzi (CCM) que ha dominado la política durante décadas, en una elección inusualmente reñida, condujo a un período de represión sin precedentes, donde los objetivos eran la oposición política, los medios, la sociedad civil y cualquier otro que fuera considerado una amenaza para el régimen. Se utilizaron tanto leyes nuevas como ya existentes para apuntar contra la oposición, inclusive se dictó una nueva ley que regulaba los partidos políticos y prohibía las manifestaciones políticas que se aplicaba de manera selectiva a la oposición y terminaba en capturas.¹⁰

La resistencia contra el creciente autoritarismo que actualmente rige en Nicaragua y Venezuela ha suscitado medidas represivas, inclusive detenciones masivas y arbitrarias, que se hicieron posibles después del desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas y la consolidación del poder ejecutivo. En Venezuela, Hugo Chávez sentó las bases para que su sucesor, Nicolás Maduro, pudiera emprender campañas de encarcelación política a gran escala, inclusive mediante el sistema de llenar los tribunales de aliados del gobierno, y por medio de nuevas leyes. Si bien Chávez solía encarcelar a sus opositores,¹¹ Maduro ha escalado significativamente el uso de la detención política y la violencia a gran escala, especialmente en medio de protestas masivas contra el gobierno que ocurrieron en 2014, 2017 y 2019.¹² “Con Maduro, lo que vimos fue un retorno a la represión sistemática clásica—capturas arbitrarias, abuso en las calles, ausencia del debido proceso, tortura de los detenidos,” según afirmó a Freedom House Tamara Taraciuk Broner, del Programa para el Estado de Derecho, directora del Diálogo Interamericano.¹³ De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, en Venezuela se capturaron cerca de 16.000 presos políticos entre enero de 2014 y diciembre de 2022. Comparativamente, la organización informó que a la muerte de Chávez en 2013, solamente había 11 presos políticos.¹⁴

En Nicaragua, la erosión de la democracia se aceleró después de que Daniel Ortega fue elegido presidente en 2006. Ortega, quien ha buscado una mayor consolidación en el poder, supervisó las medidas represivas después de que la propuesta del gobierno de reducir las pensiones provocara una manifestación masiva contra el gobierno en abril de 2018. Para mediados del año, más de 1.900 personas habían sido detenidas, dentro de las que se contaban líderes políticos de la oposición, además de activistas, académicos y periodistas.¹⁵ Desde entonces, continúan las detenciones y éstas renacieron en la antesala de la elección presidencial fraudulenta de 2021.¹⁶ En su informe de marzo de 2023, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua afirmó que tenía motivos razonables para creer que las violaciones y abusos cometidos desde el 2018, por orden de la administración de Ortega, eran consistentes con delitos de lesa humanidad.¹⁷

Los líderes han incrementado la encarcelación política en respuesta a otras manifestaciones, relativamente pacíficas, lo que limita la posibilidad de disentir. En Tailandia, entre los años 2020 y 2021, se presentaron grandes protestas, generalmente bajo el liderazgo de las juventudes a favor de la democracia, en parte como respuesta a la decisión de la corte de disolver el mayor partido de oposición¹⁸ y como resultado se encontraron con una gran cantidad de detenciones: se reportó que en agosto de 2023 cerca de 2.000 personas fueron objeto de cargos penales

relacionados con las manifestaciones.¹⁹ En Turquía, la policía reprimió de manera violenta las protestas de Gezi Park en 2013, cuyos manifestantes se oponían a la demolición de un parque, pero luego esta protesta escaló hasta convertirse en una manifestación nacional en contra del gobierno.²⁰ Si bien al inicio se detuvo a miles de personas en lo que se denominó “los juicios de Gezi” terminó en 2022 con la condena de ocho activistas por acusaciones de conspiración; cinco de ellos todavía permanecían en prisión en noviembre de 2023.²¹

La encarcelación de activistas, disidentes, periodistas y otros que desafían los abusos del gobierno tiene graves consecuencias en la salud de la democracia del país. El hecho de mantenerlos apartados de la sociedad permite a los líderes autoritarios y a los que se inclinan hacia el autoritarismo cometer abusos sin mayor escrutinio y aquellos que conservan su libertad posiblemente sean menos proclives a protestar debido al miedo real de ser los próximos detenidos. “A veces también pienso que al régimen le gusta que [los antiguos presos y detenidos políticos venezolanos] cuenten su historia porque eso aumenta el miedo,” dijo a Freedom House Franz von Bergen, periodista venezolano.²²

Presión sobre las familias y seres queridos

Además de los perjuicios causados a la sociedad civil cuando encarcelan a críticos y opositores, los daños que produce la privación política de la libertad son graves y duraderos para las víctimas y sus familias. En los seis países estudiados, los expertos resaltaron el alto precio, tanto físico como psicológico, que deben pagar. El abuso incluye la tortura sistemática en Nicaragua y Venezuela, al igual que la violencia en el primer momento de la detención y la negación de atención médica.²³

Además, los efectos de la prisión política trascienden al individuo objetivo y se extienden al grupo específico al que éste pertenece. Las familias y los seres queridos llevan un peso enorme sobre sus hombros y pueden ser presionados por las autoridades para tratar de persuadirlos de que detengan su activismo o se entreguen, o para hacer aún más daño al objetivo final. Los miembros de la familia también se exponen a ser en víctimas de detención politizada y a enfrentar cargos penales, o a ser objeto de acoso, amenazas e intimidación por parte de actores estatales y no estatales, inclusive por parte de personas que apoyan al gobierno y vigilantes.²⁴ En algunos casos, esto puede generar contiendas dentro de las familias.²⁵ Los parientes también huyen del país como resultado de la presión, lo que separa a las familias.²⁶ El precio psicológico de la encarcelación política para los miembros de la familia es inmenso y puede provenir de un sinnúmero de fuentes, como ser testigos de redadas y arrestos, incertidumbre sobre el paradero del ser querido y horribles visitas a la cárcel, en caso de que las permitan.²⁷

En los seis países analizados se informó sobre los apuros económicos que afectan tanto a los prisioneros como a sus familias: generalmente, quien mantiene el hogar es precisamente quien está tras las rejas.²⁸ Las fianzas y la asesoría legal suelen ser costosas;²⁹ además de que los parientes por lo general tienen que llevar ciertos elementos a los presos y detenidos políticos para cubrir sus necesidades básicas, como alimentos y medicinas, lo que es especialmente oneroso para las familias de bajos ingresos. En Nicaragua, un abogado especialista en derechos humanos, hablando sobre los presos políticos de bajos ingresos en ese país, señaló: “Los parientes luchan por sobrevivir y, si llevan alimentos al prisionero, posiblemente ellos mismos no puedan comer

ese día.”³⁰ El costo de viajar a visitar y llevar suministros a sus seres queridos y asistir a las audiencias judiciales también es alto.³¹ Adicionalmente, el impacto no desaparece cuando liberan al prisionero; los efectos suelen permanecer durante mucho tiempo. Los programas diseñados para ayudar a los presos políticos exigen apoyo integral y holístico que contribuya a la recuperación física, emocional y económica.

Rejas invisibles: El impacto de la muerte civil

*La muerte civil fue terrible.*³² – Defensor nicaragüense de derechos humanos

El confinamiento físico de los opositores y críticos del gobierno detenidos y encarcelados es una estrategia muy notoria encaminada a apartar a las personas de la sociedad. No obstante, más allá de las rejas, existe toda una suerte de tácticas que impiden la vida normal de los defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos, figuras de la oposición y otros. Más aún, no les permiten buscar trabajo para fomentar la democracia y los derechos humanos. Varios de los entrevistados califican lo anterior como “muerte civil.”³³ La muerte civil también ha sido reconocida como una táctica utilizada por los partidarios de los líderes autoritarios. Por ejemplo, en 2016, un periodista partidario del gobierno en Turquía hizo un llamado para someter a los académicos disidentes a la “muerte civil.”³⁴

Como concepto, la muerte civil no es nueva y se ha venido aplicando de formas distintas en una serie de contextos, tanto en la literatura como en otro tipo de informes. Dentro de esta serie de contextos se cuentan las condiciones de los opositores y críticos del gobierno en entornos autoritarios, el análisis de leyes contemporáneas y anticuadas que utilizaban este término y la discriminación contra colectivos con discapacidad o alguna enfermedad.³⁵ Nuestro enfoque va dirigido al primer concepto, es decir, al hecho de usarla para privar a los opositores de la posibilidad de participar en la sociedad mediante alguna combinación de métodos restrictivos. Si bien esta lista no es exhaustiva, de manera amplia la hemos categorizado de la siguiente manera: control de viajes nacionales e internacionales, vigilancia física de las personas objetivo, limitación de oportunidades de empleo, educación y servicios estatales (listas negras), e incautación de propiedades y otros bienes.

Estas medidas pueden estar ligadas a capturas, investigaciones y condiciones para la liberación, o también esgrimir las separadamente. Se pueden aplicar de manera formal, con o sin notificación previa, o se pueden derivar de la presión social. El recordatorio constante de que la cárcel está a un solo paso en falso de la cárcel está íntimamente ligado a la muerte civil.

Las tácticas que equivalen a la muerte civil son más potentes en combinación con otras. Por ejemplo, el seguimiento cercano de un individuo puede tener implicaciones para su capacidad de viajar tanto a nivel local como internacional. La vigilancia también puede ser muy visible cuando hay policía rondando la vivienda de la persona señalada y se interroga a sus vecinos, con lo cual se ejerce una presión social tal que puede limitar la posibilidad de encontrar trabajo y conducir a integrar una lista negra informal. Esta nebulosa de tácticas, y por consiguiente de resultados, subraya el hecho de que la muerte civil no es resultado de métodos singulares y fáciles de categorizar. Más bien, las tácticas represivas interactúan y se funden entre sí con el propósito de

crear obstáculos desde todos los ángulos. En los seis países en estudio, encontramos que se aplicaron algunas de estas combinaciones de tácticas de muerte civil a los opositores del gobierno.

Debido a que las tácticas de muerte civil son más sutiles que la encarcelación directa, los regímenes represivos pueden emplearlas para dirigir las a un gran número de opositores y críticos del gobierno sin mayor escrutinio por parte de organismos internacionales, gobiernos democráticos y otros actores. Estas medidas también pueden constituir una capa adicional de control después de concluida la sentencia de prisión o el período de detención. En términos generales, las presiones que llevan a la muerte civil contribuyen a disuadir la oposición y las críticas, lo que a largo plazo dificulta adoptar un cambio democrático.

Control de viajes

En los seis países analizados en ese estudio, las restricciones a los viajes internacionales y nacionales están ampliamente difundidas. Dentro de los mecanismos mediante los cuales se reprime el movimiento se cuentan la prohibición de viajar, el control de pasaportes, la exigencia de comparecer ante juzgados o estaciones de policía y demás medidas que trastornan la vida diaria y la participación social.

La prohibición de viajar suele estar relacionada con investigaciones penales o constituir una condición para la liberación. Antes de las elecciones generales del 2021 en Nicaragua, Cristiana Chamorro, una de las candidatas presidenciales que fue objeto de investigación penal antes de las encuestas, estuvo bajo detención domiciliaria después de anunciar su candidatura y se le prohibió formalmente salir de Nicaragua, entre otras medidas.³⁶ A principios de 2023, en Túnez, los críticos del gobierno Chaima Issa y Lazhar Akremi fueron detenidos por cargos no sustanciados de “conspiración contra la seguridad del estado” y detenidos durante cinco meses. Dentro de las condiciones para su liberación se contaban la prohibición de viajar y de “aparecer en espacios públicos,”³⁷ lo cual fue descrito por un activista como “detención domiciliaria sin mencionar el nombre.”³⁸ En Venezuela, después de que las autoridades reprimieron de forma violenta las protestas masivas contra el gobierno que comenzaron en 2014, muchos detenidos políticos también fueron puestos en libertad con la condición de que no podían viajar.³⁹

En algunos casos, las prohibiciones de viajar se expiden sin notificación alguna. Poco después de que Saïed asumió poderes excepcionales en 2021, su gobierno impuso prohibiciones de viaje a cientos de tunecinos, de los cuales muchos solo tuvieron noticia de la prohibición al ir al aeropuerto. Esta falta de notificación o documentación impide a las víctimas presentar recursos y niega la posibilidad de apelar, puesto que no suele estar claro qué entidad impone la prohibición.⁴⁰

En otros casos, las restricciones significan la prohibición de facto de viajar. En Tailandia, muchos políticos, activistas, académicos y periodistas, enviados a campos militares para “reajustar su actitud” después del golpe de 2014, fueron puestos en libertad con la condición de que firmaran acuerdos en los que prometían obtener permiso antes de viajar al extranjero, entre otras condiciones. El incumplimiento se castigaría con una nueva detención, una sentencia de prisión o el pago de una multa.⁴¹ En 2020 y 2021, volvieron a surgir impedimentos similares a

los viajes en medio de las protestas en pro de la democracia. Los acusados a los que se les otorgó libertad bajo fianza debían obtener permiso de los tribunales para salir del país. El permiso solía denegarse.⁴²

La vigilancia también puede funcionar como restricción de viaje. Un representante tunecino perteneciente a la Organización contra la Tortura explicó que las visitas regulares de la policía a las viviendas de figuras tunecinas de la oposición de hecho constituían restricciones al movimiento: “Inclusive si no les está prohibido viajar, se encuentran con el acoso permanente de agentes de policía que se presentan en sus domicilios y les ordenan informar a la estación de policía antes de salir [de la región].”⁴³ En Nicaragua, un año antes de las elecciones de 2021, la policía comenzó a vigilar regularmente a los presuntos candidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Después de que en últimas fueron acusados y sentenciados, las fuerzas de seguridad del estado bloquearon a estas dos figuras de la oposición y les impidieron salir de sus residencias; además, les informaron que les estaba prohibido salir de Managua, la capital.⁴⁴

Los procesos arbitrarios de control de pasaportes e inmigración por parte del estado también restringen la posibilidad de viajar. En Tanzania, los interrogatorios, sin motivo alguno, sobre la ciudadanía del viajero, han llevado a confiscar pasaportes de líderes de la sociedad civil y periodistas. La resolución de estas investigaciones puede tomar años, lo cual no permite a las personas señaladas trabajar ni vivir.⁴⁵ Desde 2017, las autoridades de inmigración de Venezuela han confiscado o cancelado pasaportes de figuras de la oposición, activistas, periodistas y otros opositores, mientras las autoridades del gobierno se rehúsan a renovar o a expedir estos documentos.⁴⁶ En Nicaragua, desde la dura opresión del 2018, los funcionarios hacen cada vez más difícil la salida y entrada al país de los defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes, funcionarios del gobierno y personal judicial y han llegado a confiscar pasaportes abiertamente desde 2022.⁴⁷ Igualmente, desde el intento de golpe de estado en Turquía en 2016, aquellos que tienen investigaciones abiertas se consideran “no aptos” para conseguir pasaportes, inclusive antes de que se dicte sentencia en su contra.⁴⁸ Esto ocurre encima de la revocatoria masiva de más de 100.000 pasaportes de personas naturales después del intento de golpe de estado.⁴⁹

El requisito de comparecer ante un juzgado o estación de policía a intervalos regulares es otro medio de control de viajes y vigilancia de opositores y críticos. Aunque en Nicaragua los detenidos políticos vinculados con manifestaciones contra el gobierno fueron dejados en libertad como parte de un acuerdo de amnistía firmado en 2019, aún hay muchos a quienes se les exige registrarse periódicamente ante estaciones de policía. Más recientemente, la policía nicaragüense actuó de manera coordinada para detener a 57 personas el 3 de mayo de 2023, entre ellas periodistas y defensores de derechos humanos. A pesar de que fueron puestos en libertad rápidamente, los jueces les ordenaron comparecer diariamente ante la estación de policía más cercana,⁵⁰ mientras muchos perdían sus empleos como resultado de que se veían obligados a cumplir con este estricto requisito.⁵¹ Muchos detenidos políticos que fueron dejados en libertad en Venezuela deben comparecer regularmente ante un juzgado.⁵²

El control del movimiento puede tener un efecto deletéreo, no solamente sobre el trabajo de defensoría, sino sobre el empleo y la educación. Un representante del Centro para los Defensores

y la Justicia de Venezuela describía la situación de un defensor de derechos humanos y periodista que había sido detenido y explicaba: “Esta víctima por lo general debe viajar a conferencias y trabajos fuera del país. Uno de los castigos que le impusieron fue la prohibición de viajar. De manera que, por más de un año, no podrá viajar.”⁵³ Para los estudiantes, la prohibición de viajar limita la posibilidad de estudiar en universidades extranjeras. Además, el requisito de comparecer regularmente ante un juzgado o estación de policía también dificulta conservar o conseguir empleo y asistir a clases.⁵⁴

Así mismo, las restricciones de viaje pueden separar familias. Un defensor de derechos humanos explicó que las restricciones a los viajes impuestas por el régimen nicaragüense no solamente impiden que los exiliados vuelvan a casa—estas medidas tampoco permiten que sus familiares los visiten por miedo a que les nieguen la entrada al país: “Ninguno de los dos puede entrar ni salir, por miedo a que les pase lo mismo.”⁵⁵ La muerte civil no se limita al objetivo principal del gobierno; cualquiera que forme parte de su entorno puede verse atrapado.

Vigilancia física

Los opositores del gobierno, tanto reales como presuntos, están expuestos a diversas formas de vigilancia física, especialmente por parte de las fuerzas de seguridad. Es posible que la policía rodee sus casas, los sigan cuando están fuera y hablen con sus vecinos y patronos. Además, actores no estatales, como los que apoyan al gobierno o vigilantes, también pueden realizar labores de vigilancia. Tales actos pretenden intimidar a figuras de la oposición política, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y otros, lo cual obstaculiza su trabajo y no les permite llevar una vida normal.

En Nicaragua, los detenidos políticos que fueron amnistiados en 2019 y aquellos que participaron como activistas antes de las elecciones del 2021, fueron víctimas de hostigamiento por parte de miembros de la policía y partidarios del gobierno.⁵⁶ Jesús Tefel, activista entrevistado por Freedom House, describió así el ambiente que vivió:

Los principales líderes [activistas] siempre caminaban rodeados por patrulleros o policía nacional motorizada que los seguían a todas partes ... Sin embargo, no era para protegerlos. Su objetivo era reprimirlos, vigilarlos y no había forma de huir de ellos. Por ejemplo, una vez me venían siguiendo dos motociclistas que ni siquiera llevaban el uniforme de la policía nacional. Iban vestidos de civil. [Más tarde,] en mi oficina, había varias patrullas y furgonetas de la policía y una cantidad considerable de agentes. Se llevaron mi licencia de conducir, me multaron, supuestamente por tratar de escaparme ... Pasé tres o cuatro meses sin poder conducir por este problema. Era muy difícil salir y pasar inadvertido. Las residencias de los líderes siempre estaban custodiadas y ni siquiera se ocultaban, estaban a plena luz del día frente a todo el mundo ... Nos pedían la cédula de identidad. Nos preguntaban adónde íbamos, de dónde veníamos, quién nos había visto.⁵⁷

En Tailandia, muchos de los activistas estudiantiles que participaron en las protestas a favor de la democracia en 2020–21 sufrieron una encarnizada vigilancia por parte de la policía, inclusive aquellos que habían sido detenidos y puestos en libertad bajo fianza. Kevin Hewison, un

político y experto en democracia en Tailandia, señaló que “es común que los domicilios de los activistas estén rodeados de policía y en ocasiones se presentan a registrar sus residencias o a hablar con sus vecinos, de manera que están sometidos a una fuerte presión social para que renuncien al activismo.”⁵⁸ Entre las personas afectadas hay menores de edad que han estado expuestos a una vigilancia permanente, lo cual, según Akarachai Chaimaneekarakate, líder de la defensoría de los Abogados Tailandeses para los derechos humanos, es “muy normal. De hecho, todos [los] acusados me cuentan la misma historia: ‘... Veo un tipo vestido con camiseta blanca y un corte de pelo peculiar y me digo: Sí, ese es policía vestido de paisano.’ Aprenden a identificar a los policías encubiertos.”⁵⁹ Durante esa época también se utilizaban dispositivos de vigilancia electrónica en activistas tailandeses a quienes se había puesto en libertad bajo fianza.⁶⁰

Inclusive sin existir cargos en su contra, se cita a interrogatorios regulares a los opositores a quienes pretenden vigilar e intimidar. El político Nate Grubman, hablando del líder tunecino de la oposición Rached Ghannouchi, quien está preso, destacó,⁶¹: “Antes de capturarlo, parece que tenía que comparecer ante el juzgado cada quince días por un cargo *x* y pasaba todo el día respondiendo preguntas. Luego, al final del día, lo mandaban a su casa. Es un hombre mayor. Imagínese la carga que tenía que llevar sobre sus hombros. Eso sería una carga para cualquiera.”⁶²

La amenaza de la vigilancia, además de los allanamientos de moradas y oficinas, también obligaron a las personas a modificar su comportamiento adoptando medidas de seguridad más fuertes. En Tanzania, Fulgence Massawe, director de defensoría y reformas para el Centro Jurídico y de Derechos Humanos, mientras nos mostraba las tarjetas de las oficinas de su grupo, dijo: “Solíamos trabajar libremente, pero ahora tenemos que llevar todos [estos] códigos de acceso, tarjetas magnéticas, comenzamos a usarlas hace poco.”⁶³ Los allanamientos de morada en Turquía se han convertido en algo tan común para los opositores del gobierno que preparan sus viviendas para esta eventualidad. Banu Tuna, periodista y activista turca, explicó que los agentes de policía suelen llevar a cabo estos allanamientos el día viernes en la mañana con el fin de que las personas señaladas pasen todo el fin de semana detenidos. Habló de un actor de la sociedad civil que planeaba sus tareas semanales sobre la base de que esto podía suceder.⁶⁴

Esta vigilancia tan visible crea presión social, desincentiva el libre movimiento y genera una carga psicológica significativa. Por ejemplo, Eric Goldstein, director adjunto de la División para el Medio Oriente y África del Norte de *Human Rights Watch*, señaló que en Túnez aquellos que reciben visitas frecuentes de la policía están abocados al ostracismo por parte de sus comunidades, “pero no necesariamente porque sus vecinos crean que el objetivo ha sido capturado de manera justa, sino porque tratan de evitar cualquier contacto que los pueda poner bajo sospecha.”⁶⁵ Un actor tanzano de la sociedad civil, al hacer un recuento de su propia experiencia, dijo lo siguiente: “Se aseguran de que uno no se pueda establecer.”⁶⁶

Además de otras tácticas que conducen a la muerte civil, la vigilancia no permite a los activistas, periodistas, figuras de la oposición y otros fomentar el cambio democrático y el respeto por los derechos humanos. Hablando del ambiente en la Venezuela de Maduro, un académico afirmó lo siguiente: “Creo que en el momento actual... los activistas de la sociedad civil o los líderes de movimientos de alto perfil ... se sienten observados constantemente, es decir que tienen que pensar 10 veces todo lo que van a hacer y cerciorarse de no incomodar al gobierno .”⁶⁷ Un actor

de la sociedad civil, al tratar el tema de la actividad en medios sociales en Turquía, comentó lo siguiente: “la mitad de uno piensa, ah, voy a estar bien. No van a perseguirme. Y la otra mitad [dice], si de hecho me persiguen, se me acabó la vida.”⁶⁸

Bloqueo del acceso al trabajo, a la educación y a los beneficios del gobierno

Las figuras de la oposición política, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los antiguos adeptos al régimen y el pueblo en general están expuestos a restricciones politizadas para el empleo y la educación, a recortes en beneficios sociales e incluso a la negación de la ciudadanía. Esta especie de lista negra es más evidente en el sector público, aunque la presión de la sociedad también puede tener un fuerte impacto sobre la capacidad de las personas para formar parte del sector privado.

Las listas negras sistemáticas surgen a raíz de la aceleración de la erosión de la democracia. Cuando el expresidente Chávez reformó la sociedad venezolana, “el terror...era aparecer en la lista negra, puesto que se perdía el acceso al empleo y a los servicios del gobierno,” señaló el politólogo Javier Corrales.⁶⁹ Por ejemplo, los intentos por destituir tanto a Chávez como a Maduro de la presidencia, desencadenaron despidos masivos e inclusiones en las listas negras. Después de intentar derrocar a Chávez en 2004, el político gobiernista Luis Tascón publicó en redes una lista de personas que habían firmado la petición y esta información fue recogida por el Consejo Nacional Electoral, a instancias de Chávez. La que a manera de epónimo se llamó la Lista Tascón era una guía de decisiones de despido e inclusión en listas negras para uso del gobierno y los patronos de las empresas de propiedad estatal.⁷⁰ Ocurrieron purgas similares durante el intento de destituir a Maduro en 2016.⁷¹ En Nicaragua, muchos servidores públicos, inclusive el personal del sector salud, y los maestros y profesores fueron despedidos por desempeñar un papel preponderante en las protestas de 2018 o por colaborar con los participantes.⁷²

En Turquía, un grupo de más de mil académicos, conocido como Académicos para la Paz, firmaron una carta abierta en enero de 2016 expresando su apoyo a la paz con el grupo ilícito llamado Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK). Posteriormente, los firmantes fueron despedidos de sus empleos y expulsados del sector público.⁷³ En respuesta a esta carta, un periodista proclive al gobierno hizo un llamado a aplicar “mecanismos de muerte civil” a los firmantes y pidió su exclusión de la sociedad.⁷⁴ A los pocos meses, después del intento de golpe de estado, más de 100.000 empleados del sector público fueron despedidos de sus cargos mediante decreto y sin el debido proceso,⁷⁵ supuestamente por su afinidad con la Organización Terrorista Fetullahista (FETÖ), grupo señalado por el gobierno como responsable del intento de golpe de estado. Al igual que los Académicos para la Paz, a estos servidores públicos se les prohibió trabajar en el sector público, se revocaron sus pasaportes y se les negó el acceso a los beneficios de salud.⁷⁶ Al ser señalados ante el público como afines a FETÖ, han sufrido un enorme impacto sobre su seguridad y libertad de movimiento, y están expuestos a ser detenidos nuevamente.⁷⁷

En Nicaragua, los detenidos políticos amnistiados no podían volver a la universidad, puesto que se borraron todos sus registros y les era difícil encontrar trabajo debido a la estigmatización social. Un defensor de derechos humanos recordó un caso de una amnistiada a quien “ni siquiera

se le permitía realizar trabajos pequeños para su comunidad. Salía a planchar o lavar ropa ... y sus patronos le decían que no podía seguir trabajando para ellos por ser instigadora del golpe.”⁷⁸ Antiguos detenidos políticos conectados con las protestas en pro de la democracia en Tailandia, con varios cargos pendientes, también han tenido que afrontar presiones sociales similares y no les ha sido fácil encontrar trabajo; además, tampoco pueden estudiar.⁷⁹ Varios entrevistados en Turquía mencionaron la misma estigmatización de los objetivos: “Cuando uno sale de la cárcel, la marca y la huella sale con uno,” señaló un académico turco.⁸⁰

La discriminación en la distribución de los beneficios del estado también contribuye a la muerte civil. En 2017, el gobierno venezolano lanzó una tarjeta de identificación, conocida como carnet de la patria, que está conectado con una plataforma digital centralizada. El carnet es necesario para acceder a los servicios del gobierno, como pensiones, medicinas y alimentos.⁸¹ Hernández-Roy anotó que el carnet “se utiliza como arma ... con él se pueden hacer seguimientos” y, si existe la sospecha de que alguien es detractor, “no califica para los subsidios.”⁸² En Túnez, algunos magistrados, legisladores y otros que fueron destituidos por Saïed de forma arbitraria perdieron el seguro de salud, lo cual es especialmente nocivo puesto que muchos de ellos son personas mayores y padecen de alguna enfermedad.⁸³

Los miembros de la familia también han sufrido alguna forma de muerte civil. En Nicaragua, los movimientos del gobierno para despojar a los opositores y críticos de su nacionalidad tuvieron graves consecuencias sobre los parientes de las víctimas. Se ha informado que a los hijos e hijas de los objetivos se les ha negado atención médica, matrículas escolares y pasaportes.⁸⁴ En algunos casos, el gobierno despoja a los niños del apellido del padre en el registro civil cuando éste ha sido señalado por el estado.⁸⁵ En Tanzania, los hijos de los miembros de la oposición no pueden conseguir beneficios del estado, como préstamos para estudios universitarios. Un académico compartió la historia de un muchacho que no lo consiguió: “Dijeron algo así como, uy, no tenemos tinta para el sello. El muchacho volvió con la tinta y le dijeron que esa no era la tinta oficial del gobierno y que por lo tanto no la podían utilizar.”⁸⁶ Para enfatizar la posibilidad de entrar a formar parte de una lista negra, el académico agregó: “Siempre existen estos cuellos de botella donde, esencialmente, pueden negar el acceso de las personas a beneficios que deberían ser estatutarios.”⁸⁷

Si bien la muerte civil puede ser gradual, debido a que las consecuencias de las tácticas represivas se acumulan con el tiempo, en febrero de 2023 ocurrió in caso extremo y súbito, cuando tres jueces nicaragüenses despojaron a 316 personas de su ciudadanía, dentro de los que se contaban 222 presos políticos que habían sido puestos en libertad y enviados a Estados Unidos. Desde el punto de vista legal, la medida se justificó sobre la base de reformas legislativas que permiten a las autoridades revocar la ciudadanía de quienes el estado considere traidores. Dentro de los afectados están periodistas, defensores de derechos humanos, líderes de la sociedad civil, líderes de la oposición y funcionarios del gobierno.⁸⁸ Para muchos ha sido una lucha el reto de establecerse en un nuevo país y simultáneamente procesar las circunstancias traumáticas del exilio y, “poco a poco,” dijo un abogado de derechos humanos, “van perdiendo el interés por lo que sucede en Nicaragua.”⁸⁹

Control de activos

Otra táctica que contribuye a la muerte civil es limitar el acceso de opositores y críticos a sus bienes, y por consiguiente al alojamiento y bienestar económico, lo cual se suele utilizar en conjunto con otras tácticas que ya hemos descrito. Igualmente, la incautación de cuentas bancarias y la confiscación de bienes pueden estar ligadas a investigaciones penales, detenciones y condiciones para la puesta en libertad, o pueden ser medidas independientes.

En el caso de los detenidos políticos que se considere han violado la Ley Orgánica Contra el Crimen Organizado y la Financiación del Terrorismo de Venezuela, la ley permite confiscar sus bienes, inclusive después de viajar o huir del país: “Se ven muchas residencias y oficinas en todo el país donde la policía... los funcionarios de inteligencia ... las usan como domicilio personal y privado,” afirma un líder venezolano de la sociedad civil, hablando de los bienes incautados.⁹⁰ Las autoridades venezolanas también han congelado cuentas bancarias de opositores y confiscado bienes y negocios de manera generalizada.⁹¹ Al igual que otras tácticas, el congelamiento de bienes también se puede imponer a miembros de la familia.⁹²

Últimamente, un actor de la sociedad civil de Tanzania perdió su empresa después de que se le imputaron cargos penales sin base alguna, junto con otras medidas de muerte civil:

No se me permitió cruzar las fronteras de Dar es Salaam. Me retuvieron el pasaporte. Congelaron mis cuentas bancarias. Yo tenía un negocio con ánimo de lucro. Ahora es lo que hacen ... Se aseguran de que uno no haga negocios. Dejé de generar ingresos porque lograron llegar a todas las personas con las que yo trabajaba, mis proveedores, todos ... [los] intimidaron y todos ellos dejaron de trabajar conmigo. La empresa de la cual era propietario fue tomada por unos tipos del partido de gobierno sin que yo firmara ningún documento. De manera que, de pronto, me encontré con que ya no era director de mi propia compañía. Ya no era accionista de mi empresa.⁹³

En febrero de 2023, además de despojar a más de 300 nicaragüenses de su nacionalidad, los jueces ordenaron la incautación de sus bienes. El estado confiscó casas y haciendas borrando los nombres de sus dueños de las escrituras de propiedad y los bancos congelaron las cuentas de las víctimas. Los parientes y arrendatarios que vivían en las propiedades incautadas fueron obligados a pagar el arriendo a la fiscalía general.⁹⁴ Se reportó que la incautación de bienes se ha extendido más allá de los apátridas. Un periodista nicaragüense señaló: “Hay personas que no han sido acusadas de traición, a pesar de ser opositoras. Sin embargo, sus hogares han desaparecido del registro de bienes. Eso significa que, de un día para otro, uno se queda sin nada. Las cuentas bancarias están congeladas y el banco ni siquiera advierte al cuentahabiente.”⁹⁵

El congelamiento de cuentas bancarias conlleva serios problemas para aquellos que carecen de seguridad económica. Hablando de las condiciones en Túnez, Radwan Masmoudi, presidente del Centro para el Estudio del Islam y la Democracia, compartió lo siguiente: “La gente está sufriendo muchísimo. La economía va mal, muy mal. Hay escasez de alimentos. Si a eso se le suma que sus cuentas bancarias están congeladas, ¿cómo se supone que uno viva?”⁹⁶

Amenaza persistente de muerte civil

Entre las condiciones que provocan la muerte civil, ya sean éstas prohibición de viajar, vigilancia policial, eliminación de registros académicos o pensiones congeladas, existe el temor de que el objetivo señalado sea enviado a prisión en cualquier momento. Una muletilla recurrente entre todos los entrevistados por Freedom House es el hecho de que normalmente los procesos penales nunca se resuelven por completo y dejan abierta la posibilidad de una nueva detención. Los obstáculos a la participación normal en sociedad, junto con la amenaza permanente de convertirse en preso político, han logrado que los opositores del gobierno huyan del país. Las consecuencias de la muerte civil también sirven de advertencia para otros.⁹⁷

La muerte civil inhibe el cambio democrático porque puede desembocar en que los defensores de derechos humanos, periodistas, figuras de la oposición, y otros renuncien al trabajo de toda su vida. Akarachai, de Abogados Tailandeses para los Derechos Humanos, dijo: “Muchos de los líderes de las protestas están sobrecargados con todas estas condiciones para las fianzas y creemos que muchos de ellos están verdaderamente cansados. Este hostigamiento judicial permanente, las condiciones para la fianza ... realmente desgastan y muchos se vuelven menos activos políticamente.”⁹⁸ Berna Akkızal, directora ejecutiva y cofundadora de la Asociación de Estudios Espaciales Cívicos de Turquía, expresó preocupaciones similares: “Las personas se acostumbran a este tipo de cosas, supongo. La gente se acostumbra a la opresión. Esa es la parte más difícil de mi tarea como activista.”⁹⁹

Las tácticas más sutiles que llevan a la muerte civil, comparadas con la prisión política directa, también dificultan que las partes interesadas externas reconozcan cuándo hay muerte civil y cómo ésta limita el trabajo de la democracia y los derechos humanos. La identificación de las tácticas que desembocan en muerte civil y la comprensión del impacto general que ésta tiene sobre el objetivo en términos de salud física y mental, bienestar económico y, en la raíz, la capacidad de participar en la sociedad, son cruciales para seguir luchando por revertir la erosión de la democracia.

Ataques contra la independencia judicial y recursos limitados

Uno de los hallazgos fundamentales que surge de los casos de estudio en los seis países, y que tiene consecuencias para las democracias amenazadas en todo el mundo, es el papel crucial que desempeña el poder judicial. Además de facilitar la encarcelación política y la muerte civil, el debilitamiento de la independencia judicial limita drásticamente la posibilidad de que las víctimas tengan oportunidad de presentar recursos y exigir responsabilidad. Simultáneamente, en un régimen tendiente a la autocracia, los miembros del poder judicial también se convierten en presos políticos y víctimas de muerte civil, lo cual se agrava por la decadencia de la independencia judicial.

En varios casos analizados por Freedom House, los aspirantes a autócratas que ganaron las elecciones están empeñados en reformar el poder judicial. Antes de asumir la presidencia de Nicaragua en 2007, Daniel Ortega, mediante una alianza con el entonces presidente Arnoldo Alemán, logró el respaldo de una serie de nominados para magistrados para ampliar la Corte Suprema de Justicia. Además, los tribunales conservaron a algunos jueces aliados de Ortega

inclusive antes de formalizar el pacto.¹⁰⁰ En el momento en que se levantaron las protestas de 2018, ya estaba en funciones una judicatura complaciente que servía de facilitadora esencial para las detenciones, acusaciones penales y encarcelaciones politizadas.¹⁰¹

La situación de Venezuela es similar. En 1999, después de que Chávez se posesionara como presidente, efectivamente éste logró el poder de destituir jueces y conformar un poder judicial por medio de cuerpos legislativos dominados por chavistas. Posteriormente, éstos se encargaron de crear una comisión de emergencia para destituir o suspender jueces mediante dudosos alegatos de presunta corrupción y luego conformaron una Corte Suprema de Justicia plagada de magistrados nombrados por su lealtad al gobierno. Debido a que la Corte Suprema controla las nominaciones de las cortes más bajas, gradualmente el conjunto del sistema judicial perdió independencia.¹⁰² La transformación del poder judicial venezolano que se atribuye a Chávez facilitó la represión masiva que comenzó con la presidencia de Maduro en 2014,¹⁰³ e igualmente agudizó la falta de recursos judiciales legítimos.

Igualmente, Erdoğan ha venido debilitando la independencia judicial en Turquía. Los defectos de un poder judicial, ya de por sí politizado, se acrecentaron por causa del referéndum constitucional de 2010 que otorgó a Erdoğan el poder de reestructurarlo y abrió la puerta a juicios ficticios contra personas o instituciones percibidas como opositoras del partido de gobierno, Partido de Justicia y Desarrollo (AKP).¹⁰⁴ En 2018, un referéndum constitucional le otorgó a Erdoğan incluso más poder para nombrar miembros de la judicatura.¹⁰⁵ Además, las sentencias de los tribunales a favor de los acusados en la práctica no son efectivas, como el fallo de 2019 que revocaba castigos previos y defendía la libertad de expresión de los Académicos para la Paz. A pesar de este fallo favorable, muchos miembros del grupo fueron víctimas de algunos elementos de muerte civil. Por ejemplo, no podían encontrar trabajo académico por cuanto Erdoğan nombró rectores universitarios partidarios del gobierno que eran reacios a volver a contratar académicos disidentes.¹⁰⁶

En Túnez, poco después de la suspensión del parlamento en 2021, el presidente Saïed disolvió el Alto Consejo Judicial y lo sustituyó por un cuerpo temporal cuyos miembros son nombrados por decreto.¹⁰⁷ Posteriormente, Saïed expidió un decreto que le permitía destituir a cualquier juez sin el debido proceso y posteriormente despidió a 57 jueces por supuesta corrupción financiera y moral.¹⁰⁸ Aunque el Tribunal Administrativo de Túnez suspendió 49 de estos despidos, el Ministerio de Justicia se niega a reincorporar a los jueces.¹⁰⁹ “Las instituciones prácticamente ya no existen,” señaló un antiguo preso político tunecino. “Nuestros jueces tienen miedo de dictar sentencias en los procesos... Cuando una sociedad carece de justicia, va muy mal.”¹¹⁰

Los tribunales militares y de jurisdicción especial, que limitan aún más el derecho al debido proceso, también se utilizan como arma contra opositores y críticos del gobierno. Por ejemplo, los procesos políticos en Venezuela pueden ser juzgados por tribunales militares o de jurisdicción especial cuando se trata de casos de terrorismo.¹¹¹ Durante un tiempo, posterior al golpe militar de 2014 en Tailandia, algunos delitos, como los de lesa majestad, sedición y violación de los mandatos y anuncios de la junta militar, están bajo la jurisdicción militar.¹¹²

Los mismos jueces corren el riesgo de convertirse en objetivos políticos. Después del intento de golpe en 2016 en Turquía, el gobierno llevó a cabo una purga de más de 4.000 jueces y

fiscales,¹¹³ y más de 2.000 fueron detenidos por sospecha de participación en la conspiración o por pertenecer a organizaciones terroristas.¹¹⁴ Dos de los 57 magistrados destituidos en Túnez fueron capturados y detenidos sin juicio durante varios meses.¹¹⁵ El rechazo de los ataques contra la independencia judicial también ha sido castigado: cuando un juez tunecino colaboró con la organización de una huelga para protestar contra los despidos arbitrarios, el Alto Consejo Judicial Temporal le negó su inmunidad en calidad de juez y abrió investigación penal en su contra por “incitación.”¹¹⁶

En Venezuela, la juez María Lourdes Afiuni fue privada de su libertad durante años por un proceso que sirvió de advertencia para otros jueces en el sentido de que carecían de protección contra las represalias severas y arbitrarias del estado.¹¹⁷ En 2009, Afiuni ordenó la liberación supervisada de un banquero acusado de delitos financieros, puesto que estuvo detenido sin condena por más tiempo del límite legal; posteriormente, esta persona huyó de país. Poco tiempo después de su decisión, Afiuni fue capturada por delitos de corrupción, detenida en prisión y dos años después se le otorgó detención domiciliaria, antes de ser liberada con la condición de que no saliera de Venezuela, entre otras medidas. In 2019, fue condenada a cinco años de cárcel.¹¹⁸ (La sentencia no ha sido ejecutada aún.)

En un choque de trenes entre las altas cortes de Turquía, el tribunal de apelación más alto del país no solamente inadmitió la decisión dictada en noviembre de 2023 por la Corte Constitucional en el sentido de que Can Atalay, abogado y miembro electo del parlamento, quien ha permanecido detenido desde abril de 2022, debía ser puesto en libertad, sino que presentó denuncia penal contra los miembros de la Corte Constitucional que votaron a favor de su liberación.¹¹⁹ Separadamente, en Venezuela y Tanzania, los jueces que cayeron en desgracia con las autoridades han sido transferidos de manera arbitraria, en ocasiones a zonas apartadas.¹²⁰

Además, los fallos de la justicia regional, que deberían ser el último recurso, no siempre se sostienen. En 2011, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela dictaminó que la decisión vinculante de la Corte Interamericana, en el sentido de revertir la prohibición de que la figura de la oposición Leopoldo López presentara su candidatura no se podía hacer efectiva, puesto que contradecía la constitución del país y violaba su soberanía.¹²¹ Turquía ha ignorado la orden dictada por la Corte Europea de Derechos Humanos en el sentido de poner en libertad al filántropo y líder cívico Osman Kavala y al político de la oposición Selahattin Demirtaş, mientras en 2019 el gobierno tanzano revocaba el derecho ciudadano de presentar demandas directamente ante la Corte Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos. Tanzania ha obtenido la cifra más alta de procesos y juicios entablados en su contra.¹²²

La carencia de independencia judicial a nivel sistémico deja pocos caminos abiertos para la presentación de recursos por parte de opositores y críticos del gobierno que se encuentran privados de la libertad por motivos políticos o sufren muerte civil. Mientras la resiliencia de un puñado de jueces de mentalidad independiente puede ser fuente de esperanza, ellos mismos no están protegidos y actúan por su propia cuenta y riesgo.

Avance hacia el futuro

La prisión política y las tácticas de muerte civil son herramientas esenciales que utilizan los líderes autoritarios y no democráticos en el intento de expulsar de la sociedad a sus críticos más ruidosos. Además, el hecho de utilizar tácticas más sutiles de muerte civil contra sus opositores les permite evadir el escrutinio externo y el clamor que suele suscitar la prisión de carácter político. En cada uno de los seis países en estudio, encontramos que se aplicaron la encarcelación política y las tácticas de muerte civil contra los opositores del gobierno cuando éstos emprendían una serie de actividades encaminadas a apoyar la democracia y los derechos fundamentales. Encontramos además que los intentos de eliminarlos de la sociedad iban acompañados de períodos de fuerte deterioro de la democracia.

A pesar del laberinto de penurias que sufren o pueden llegar a sufrir tanto defensores de derechos humanos, como activistas de la democracia, periodistas, opositores políticos, manifestantes y personas del común en entornos tendientes a la autocracia, el trabajo de personas valientes que luchan por sacar a la luz y contrarrestar los abusos es razón suficiente para no perder la esperanza. A pesar de correr un gran riesgo, las organizaciones de la sociedad civil documentan la violación de los derechos humanos y ayudan a las víctimas. Los abogados defensores defienden a sus clientes que languidecen en prisión, se enfrentan a procesos penales ridículos o están sujetos a prohibiciones arbitrarias de viaje y las familias denuncian el confinamiento y los malos tratos injustos a los que se somete a sus seres queridos, buscan soluciones y abogan por su liberación. En este proceso, crean conexiones con aquellos que se encuentran en circunstancias igualmente aterradoras. En los tribunales todavía quedan jueces y fiscales imparciales que trabajan por el respeto al debido proceso y rechazan las persecuciones—aunque los riesgos que corren al hacerlo subrayan la importancia de evitar, como primera medida, la degradación de la independencia del poder judicial.

La conjugación de estos esfuerzos recuerda a los defensores de la democracia que la lucha por la libertad, incluso en entornos cada vez más amenazantes, no son en vano. Trabajar por garantizar la liberación incondicional de los presos políticos es un paso que deben dar los actores internacionales y los gobiernos democráticos para complementar la defensoría local.

Sin embargo, los desafíos para los presos políticos y sus familias no terminan con su liberación. También es de gran importancia proporcionar recursos a largo plazo para garantizar el tratamiento psicosocial y médico, reconocer las tácticas visibles de muerte civil y traer estas circunstancias a la luz. Esto podría, en primer lugar, elevar el costo de imponer restricciones. Las anteriores son apenas algunas de las medidas que se pueden tomar para contrarrestar el autoritarismo y evitar futuras oleadas de represión.

¹ Interview with a Tanzanian civil society actor who requested anonymity, July 2023.

² The term “civil death” has been used in various ways in other fields of study, including in analysis of antiquated and contemporary law, and to characterize discrimination against people with disabilities or who face certain diseases, among others. Gabriel J. Chin, “The New Civil Death: Rethinking Punishment in the Era of Mass Conviction,” *University of Pennsylvania Law Review* 160, no. 6 (2012): 1789-1833, https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=penn_law_review; National Council on Disability, “Beyond Guardianship: Toward Alternatives That Promote Greater Self-Determination,” March 22, 2018, https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Guardianship_Report_Accessible.pdf; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “UN rights expert urges action to end ‘civil death’ of persons affected by

leprosy,” June 19, 2018, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/06/un-rights-expert-urges-action-end-civil-death-persons-affected-leprosy>.

³ Interview with Christopher Hernandez-Roy, Senior Fellow and Deputy Director, Americas Program, Center for Strategic and International Studies, August 2023.

⁴ Interview with Radwan Masmoudi, president of the Center for the Study of Islam and Democracy, August 2023, speaking on behalf of citizens and activists based in Tunisia.

⁵ Jonathan M. Powell and Clayton L. Thyne, “Global Instances of Coups from 1950 to 2010: A New Dataset,” *Journal of Peace Research* 48, no. 2 (2011): 249-259, https://www.uky.edu/~clthyn2/coup_data/home.htm.

⁶ Human Rights Watch, “To Speak Out is Dangerous: Criminalization of Peaceful Expression in Thailand,” October 24, 2019, <https://www.hrw.org/report/2019/10/25/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand>. See also interviews with Akarachai Chaimaneekarakate, advocacy lead for Thai Lawyers for Human Rights, August 2023; Tyrell Haberkorn, Director of Graduate Studies, Professor of Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, July 2023; and Bencharat Sae Chua, Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Thailand, July 2023.

⁷ Amnesty International, “Human rights under assault two years after President Saied’s power grab,” July 24, 2023, <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2023/07/human-rights-under-assault-two-years-after-president-saieds-power-grab/>.

⁸ Interview with a Turkish civil society actor, June 2023.

⁹ Human Rights Watch, “Turkey: Government Targeting Academics,” May 14, 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/05/14/turkey-government-targeting-academics>; Human Rights Watch, “Turkey: Release Politicians Wrongfully Detained for 7 Years,” November 3, 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/11/03/turkey-release-politicians-wrongfully-detained-7-years>; Media and Law Studies Association (MLSA) Stakeholder report, Universal Periodic Review 35th Session, Turkey.

¹⁰ American Bar Association, Center for Human Rights, “Submission by the American Bar Association, Center for Human Rights (ABA CHR) in respect of the third periodic cycle of the Universal Periodic Review (UPR) of the United Republic of Tanzania, 39th Session of the UPR Working Group (October - November 2021),” June 2021, https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/justice-defenders/eng-chr-tanzania-upr-2021.pdf; Freedom House, “Tanzania,” in *Freedom in the World 2019*, <https://freedomhouse.org/country/tanzania/freedom-world/2019>.

¹¹ See, for example, interviews with Christopher Hernandez-Roy, Senior Fellow and Deputy Director, Americas Program, Center for Strategic and International Studies, August 2023; and Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023.

¹² Interview with a representative from the Center for Defenders and Justice, July 2023.

¹³ Interview with Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023.

¹⁴ Foro Penal, “Reporte sobre la represión en Venezuela. Año 2022 [Report on repression in Venezuela in 2022],” February 12, 2023, <https://foropenal.com/reportesobre-la-represion-en-venezuela-ano-2022/>; Alfredo Romero, “The Repression Clock: A Strategy Behind Autocratic Regimes,” Wilson Center Latin American Program, July 2020, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Repression%20Clock_final.pdf.

¹⁵ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Human Rights Violations and Abuses in the Context of Protests in Nicaragua 18 April - 18 August 2018,” August 2018, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_EN.pdf.

¹⁶ “OAS members condemn Nicaragua elections, urge action,” Reuters, November 12, 2021, <https://www.reuters.com/world/americas/oas-members-condemn-nicaragua-elections-urge-action-2021-11-13/>; UN Human Rights Council, Report of the Group of Human Rights Experts on Nicaragua, A/HRC/52/63 (March 2, 2023). See also interviews with Yaritzha Mairena, representative of the National Union of Nicaraguan Political Prisoners, August 2023; Lucas Perelló, assistant professor of political science, Marist College, June 2023; a Nicaraguan human rights lawyer who requested anonymity, August 2023; a Nicaraguan journalist, July 2023; and a Nicaraguan human rights defender, August 2023.

¹⁷ UN Human Rights Council, Report of the Group of Human Rights Experts on Nicaragua, A/HRC/52/63 (March 2, 2023).

¹⁸ Rebecca Ratcliffe, “Thai court dissolves opposition party Future Forward,” *Guardian*, February 21, 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/feb/21/thai-court-dissolves-opposition-party-future-forward>.

-
- ¹⁹ Interview with Akarachai Chaimaneekarakate, advocacy lead for Thai Lawyers for Human Rights, August 2023.
- ²⁰ Amnesty International, “Gezi Park protests: Brutal denial of the right to peaceful assembly in Turkey,” October 2, 2013, <https://www.amnesty.org/en/documents/EUR44/022/2013/en/>.
- ²¹ Human Rights Watch, “Turkey: Top Court Upholds Rights Defender’s Life Term,” October 10, 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/10/10/turkey-top-court-upholds-rights-defenders-life-term>.
- ²² Interview with Franz von Bergen, Venezuelan journalist, June 2023.
- ²³ International Federation for Human Rights, “Tanzania: Arbitrary detention of Mr. Tito Magoti,” December 26, 2019, <https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/tanzania-arbitrary-detention-of-mr-tito-magoti>; “African court orders Tunisia to allow legal access to political prisoners,” Middle East Eye, September 2, 2023, <https://www.middleeasteye.net/news/african-court-orders-tunisia-allow-legal-access-political-prisoners>; UN Human Rights Council, Detailed findings of the independent international factfinding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/45/CRP.11 (September 15, 2020); UN Human Rights Council, Report of the Group of Human Rights Experts on Nicaragua, A/HRC/52/63 (March 2, 2023). See also, for example, interviews with Javier Corrales, Dwight W. Morrow 1895 professor of Political Science, Amherst College, August 2023; Nate Grubman, political scientist researching Tunisian politics, June 2023; Yaritzha Mairena, representative of the National Union of Nicaraguan Political Prisoners, August 2023; Fulgence Massawe, director of advocacy and reforms for the Legal and Human Rights Centre, July 2023; a representative from the Venezuelan Observatory of Social Conflict, August 2023; a scholar focused on Tanzania who requested anonymity, August 2023; and a scholar focused on Venezuela, August 2023.
- ²⁴ “Confirman condena de ocho y diez años de cárcel a familiares del opositor exiliado, Javier Álvarez [Relatives of exiled opposition leader sentenced to 8 and 10 years in prison],” Confidencial, January 18, 2023, <https://confidencial.digital/nacion/confirman-condena-de-ocho-y-diez-anos-de-carcel-a-familiares-del-opositor-exiliado-javier-alvarez/>; “Thai activist’s mother charged under royal insult laws over Facebook post,” Reuters, August 1, 2016, <https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-idUSKCN10C230/>; Alfredo Romero, “The Repression Clock: A Strategy Behind Autocratic Regimes,” Wilson Center Latin American Program, July 2020, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Repression%20Clock_final.pdf; UN Human Rights Council, Detailed findings of the independent international factfinding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/45/CRP.11 (September 15, 2020); José Urrejola, “Secuestros de familiares de opositores en Nicaragua [Kidnappings of relatives of opponents in Nicaragua],” Deutsche Welle (DW), September 19, 2022, <https://www.dw.com/es/secuestros-de-familiares-de-opositores-en-nicaragua-est%C3%A1n-llegando-al-l%C3%ADmite-de-la-represi%C3%B3n/a-63175103>. See also interviews with a civil society actor focused on Thailand who requested anonymity, June 2023; Howard Eissenstat, associate professor, St. Lawrence University, July 2023; Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023; and Jesús Tefel, Nicaraguan activist, July 2023.
- ²⁵ See, for example, interviews with Pavin Chachavalpongpun, a Thai scholar and activist, July 2023; Akarachai Chaimaneekarakate, advocacy lead for Thai Lawyers for Human Rights, August 2023; a civil society actor focused on Thailand who requested anonymity, June 2023; and an activist focused on Tunisia who requested anonymity, August 2023.
- ²⁶ See, for example, interviews with Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023; Jesús Tefel, Nicaraguan activist, July 2023; and a Nicaraguan human rights defender, August 2023.
- ²⁷ Interviews with Pavin Chachavalpongpun, a Thai scholar and activist, July 2023; Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023; a Nicaraguan human rights defender, August 2023; and a civil society actor based in Turkey who requested anonymity, July 2023.
- ²⁸ UN Human Rights Council, Detailed findings of the independent international factfinding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/45/CRP.11 (September 15, 2020). See also interviews with Kevin Hewison, Emeritus Professor, Department of Asian Studies, The University of North Carolina at Chapel Hill, July 2023; Yaritzha Mairena, representative of the National Union of Nicaraguan Political Prisoners, August 2023; Radwan Masmoudi, president of the Center for the Study of Islam and Democracy, August 2023; Lucas Perelló, assistant professor of political science, Marist College, June 2023; Jesús Tefel, Nicaraguan activist, July 2023; a Nicaraguan journalist, July 2023; a Nicaraguan human rights defender, August 2023; a Tanzanian civil society actor, August 2023; and a civil society actor based in Turkey who requested anonymity, July 2023.
- ²⁹ See, for example, interview with Aikande Kwayu, independent political analyst in Tanzania, August 2023.
- ³⁰ Interview with a Nicaraguan human rights lawyer who requested anonymity, August 2023.

³¹ See, for example, interviews with Tyrell Haberkorn, Director of Graduate Studies, Professor of Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, July 2023; a Nicaraguan human rights lawyer who requested anonymity, August 2023; and a Nicaraguan human rights defender, August 2023.

³² Interview with a Nicaraguan human rights defender, August 2023.

³³ See, for example, interviews with Berna Akkızal, executive director and cofounder of the Civic Spaces Association, August 2023; a Nicaraguan journalist, July 2023; a Turkish academic who requested anonymity, July 2023; and a Nicaraguan human rights defender, August 2023.

³⁴ Cem Küçük, “‘Medeni Ölüm’ mekanizmaları! [‘Civil death’ mechanisms!],” *Star*, January 16, 2016, <https://www.star.com.tr/yazar/medeni-olum-mekanizmalari-yazi-1082729/>.

³⁵ See, for example, Amnesty International, “No End in Sight: Purged Public Sector Workers Denied a Future in Turkey,” May 22, 2017, <https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/6272/2017/en/>; Amnesty International, “Silence at any cost: State tactics to deepen the repression in Nicaragua,” February 15, 2021, <https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/3398/2021/en/>; Gabriel J. Chin, “The New Civil Death: Rethinking Punishment in the Era of Mass Conviction,” *University of Pennsylvania Law Review* 160, no. 6 (2012): 1789-1833, https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=penn_law_review; National Council on Disability, “Beyond Guardianship: Toward Alternatives That Promote Greater Self-Determination,” March 22, 2018, https://ncd.gov/sites/default/files/NCD_Guardianship_Report_Accessible.pdf; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “UN rights expert urges action to end ‘civil death’ of persons affected by leprosy,” June 19, 2018, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/06/un-rights-expert-urges-action-end-civil-death-persons-affected-leprosy>.

³⁶ Human Rights Watch, “Critics Under Attack: Harassment and Detention of Opponents, Rights Defenders and Journalists Ahead of Elections in Nicaragua,” June 22, 2021, <https://www.hrw.org/report/2021/06/22/critics-under-attack/harassment-and-detention-opponents-rights-defenders-and>.

³⁷ Amnesty International, “Tunisia: Jailed opposition figures on hunger strike: Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj and Abdelhamid Jelassi,” October 5, 2023, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/7273/2023/en>.

³⁸ Amnesty International UK, “Tunisia: Jailed Opposition Figures on Hunger Strike,” October 5, 2023, <https://www.amnesty.org.uk/urgent-actions/jailed-opposition-figures-hunger-strike>. See also interview with an activist focused on Tunisia who requested anonymity, August 2023.

³⁹ UN Human Rights Council, Detailed findings of the independent international factfinding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/45/CRP.11 (September 15, 2020).

⁴⁰ See, for example, interview with Nate Grubman, political scientist researching Tunisian politics, June 2023.

⁴¹ Human Rights Watch, “To Speak Out is Dangerous: Criminalization of Peaceful Expression in Thailand,” October 24, 2019, <https://www.hrw.org/report/2019/10/25/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand>.

⁴² See, for example, interviews with Pavin Chachavalpongpun, a Thai scholar and activist, July 2023; Akarachai Chaimaneekarakate, advocacy lead for Thai Lawyers for Human Rights, August 2023; Tyrell Haberkorn, Director of Graduate Studies, Professor of Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, July 2023; Kevin Hewison, Emeritus Professor, Department of Asian Studies, The University of North Carolina at Chapel Hill, July 2023; and Bencharat Sae Chua, Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Thailand, July 2023.

⁴³ Interview with a representative from the Organization against Torture in Tunisia, July 2023.

⁴⁴ Human Rights Watch, “Critics Under Attack: Harassment and Detention of Opponents, Rights Defenders and Journalists Ahead of Elections in Nicaragua,” June 22, 2021, <https://www.hrw.org/report/2021/06/22/critics-under-attack/harassment-and-detention-opponents-rights-defenders-and>.

⁴⁵ Human Rights Watch, “‘As Long as I am Quiet, I am Safe’: Threats to Independent Media and Civil Society in Tanzania,” October 28, 2019, <https://www.hrw.org/report/2019/10/28/long-i-am-quiet-i-am-safe/threats-independent-media-and-civil-society-tanzania>.

⁴⁶ Alfredo Romero, “The Repression Clock: A Strategy Behind Autocratic Regimes,” Wilson Center Latin American Program, July 2020, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Repression%20Clock_final.pdf.

⁴⁷ “País por cárcel: así secuestra el régimen de Ortega los pasaportes de los nicaragüenses [Country for prison: this is how the Ortega regime seizes the passports of Nicaraguans],” *Divergentes*, December 6, 2022, <https://www.divergentes.com/pais-por-carcel-asi-secuestra-el-regimen-de-ortega-los-pasaportes-de-los->

[nicaraguenses/](#). See also interview with Yaritzha Mairena, representative of the National Union of Nicaraguan Political Prisoners, August 2023.

⁴⁸ Interview with a civil society actor based in Turkey who requested anonymity, July 2023.

⁴⁹ Amnesty International, “No End in Sight: Purged Public Sector Workers Denied a Future in Turkey,” May 22, 2017, <https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/6272/2017/en/>; Ali Yildiz, “Turkey’s Disregard for the Freedom of Movement,” *Verfassungsblog*, December 11, 2019, <https://verfassungsblog.de/turkeys-disregard-for-the-freedom-of-movement/>.

⁵⁰ “Encarcelamientos nocturnos y juicios exprés son ‘arbitrarios y anómalos’ [Night arrests and express trials are ‘arbitrary and anomalous’],” *Confidencial*, May 6, 2023, <https://confidencial.digital/nacion/abogada-yonarqui-martinez-anomalo-planeado-capturas-mayo/>; “Unos 65 opositores a Ortega han sido detenidos en lo que va de mayo, según observatorio [Some 65 opponents of Ortega have been arrested so far in May, according to observations by Blue and White Monitor],” *SWI swissinfo.ch*, May 20, 2023, https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-crisis_unos-65-opositores-a-ortega-han-sido-detenidos-en-lo-que-va-de-mayo--seg%C3%BAAn-observatorio/48528754.

⁵¹ See, for example, interview with a Nicaraguan human rights defender, August 2023.

⁵² See, for example, interviews with Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023; Franz von Bergen, Venezuelan journalist, June 2023; a representative from Center for Defenders and Justice, July 2023; and a Venezuelan civil society leader, August 2023.

⁵³ Interview with a representative from the Center for Defenders and Justice, July 2023.

⁵⁴ See, for example, interviews with Berna Akkızal, executive director and cofounder of the Civic Space Studies Association, August 2023; and a Nicaraguan human rights defender, August 2023.

⁵⁵ Interview with a Nicaraguan human rights defender, August 2023.

⁵⁶ Amnesty International, “Silence at any cost: State tactics to deepen the repression in Nicaragua,” February 15, 2021, <https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/3398/2021/en/>; Human Rights Watch, “Critics Under Attack: Harassment and Detention of Opponents, Rights Defenders and Journalists Ahead of Elections in Nicaragua,” June 22, 2021, <https://www.hrw.org/report/2021/06/22/critics-under-attack/harassment-and-detention-opponents-rights-defenders-and>.

⁵⁷ Interview with Jesús Tefel, Nicaraguan activist, July 2023.

⁵⁸ Interview with Kevin Hewison, Emeritus Professor, Department of Asian Studies, The University of North Carolina at Chapel Hill, July 2023.

⁵⁹ Interview with Akarachai Chaimaneekarakate, advocacy lead for Thai Lawyers for Human Rights, August 2023.

⁶⁰ See, for example, interviews with Pavin Chachavalpongpun, Thai scholar and activist, July 2023; Akarachai Chaimaneekarakate, advocacy lead for Thai Lawyers for Human Rights, August 2023; Tyrell Haberkorn, Director of Graduate Studies, Professor of Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, July 2023; Kevin Hewison, Emeritus Professor, Department of Asian Studies, The University of North Carolina at Chapel Hill, July 2023; and a Thai civil society actor, August 2023.

⁶¹ Amnesty International, “Tunisia: Ghannouchi sentencing marks aggressive crackdown on Saied opposition,” May 18, 2023, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/05/tunisia-ghannouchi-sentencing-marks-aggressive-crackdown-on-saied-opposition/>.

⁶² Interview with Nate Grubman, political scientist researching Tunisian politics, June 2023.

⁶³ Interview with Fulgence Massawe, director of advocacy and reforms for the Legal and Human Rights Centre, July 2023.

⁶⁴ Interview with Banu Tuna, Turkish journalist and activist, August 2023.

⁶⁵ Interview with Eric Goldstein, Deputy Director, Middle East and North Africa Division, Human Rights Watch, August 2023.

⁶⁶ Interview with a Tanzanian civil society actor who requested anonymity, July 2023.

⁶⁷ Interview with a scholar focused on Venezuela, August 2023.

⁶⁸ Interview with a Turkish civil society actor, June 2023.

⁶⁹ Interview with Javier Corrales, Dwight W. Morrow 1895 professor of Political Science, Amherst College, August 2023.

⁷⁰ Human Rights Watch, “A Decade Under Chávez: Political Intolerance and Lost Opportunities for Advancing Human Rights in Venezuela,” September 2008, <https://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908/index.htm>; Transparencia Venezuela, “Carnet de la Patria: El Apartheid Revolucionario [Homeland Card: Revolutionary Apartheid],” <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2018/03/Carnet-de-la-patria-2018-TV.pdf>.

-
- ⁷¹ Mariana Zuñiga, “Venezuelan civil servants signed a petition to oust the president. Now they’re losing their jobs,” *Washington Post*, July 23, 2016, <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/07/23/venezuelan-civil-servants-signed-a-petition-to-oust-the-president-now-theyre-losing-their-jobs/>.
- ⁷² Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Human Rights Violations and Abuses in the Context of Protests in Nicaragua 18 April - 18 August 2018,” August 2018, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_EN.pdf.
- ⁷³ Frontline Defenders, “Judicial Harassment against the Members of Academics for Peace,” last updated November 8, 2019, <https://www.frontlinedefenders.org/en/case/judicial-harassment-academics-peace>.
- ⁷⁴ Cem Küçük, “‘Medeni Ölüm’ mekanizmaları! [‘Civil death’ mechanisms!],” *Star*, January 16, 2016, <https://www.star.com.tr/yazar/medeni-olum-mekanizmalari-yazi-1082729/>.
- ⁷⁵ Ali Yıldız, “Turkey’s Disregard for the Freedom of Movement,” *Verfassungsblog*, December 11, 2019, <https://verfassungsblog.de/turkeys-disregard-for-the-freedom-of-movement/>.
- ⁷⁶ Amnesty International, “No End in Sight: Purged Public Sector Workers Denied a Future in Turkey,” May 22, 2017, <https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/6272/2017/en/>.
- ⁷⁷ Ibid.
- ⁷⁸ Interview with a Nicaraguan human rights defender, August 2023.
- ⁷⁹ Thai Lawyers for Human Rights, “1 Year of Political Bails: At Least 54 Required to Wear EM Devices Affecting Their Daily Lives,” April 25, 2022, <https://tlhr2014.com/en/archives/42865>. See also interviews with Pavin Chachavalpongpun, Thai scholar and activist, July 2023; Akarachai Chaimaneekarakate, advocacy lead for Thai Lawyers for Human Rights, August 2023; Tyrell Haberkorn, Director of Graduate Studies, Professor of Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, July 2023; Kevin Hewison, Emeritus Professor, Department of Asian Studies, The University of North Carolina at Chapel Hill, July 2023; a Thai civil society actor, August 2023; and a civil society actor focused on Thailand who requested anonymity, June 2023.
- ⁸⁰ Interview with a Turkish academic who requested anonymity, July 2023.
- ⁸¹ Freedom House, “Venezuela,” in *Freedom on the Net 2023*, <https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-net/2023>; Transparencia Venezuela, “Carnet de la Patria: El Apartheid Revolucionario [Homeland Card: Revolutionary Apartheid],” <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2018/03/Carnet-de-la-patria-2018-TV.pdf>.
- ⁸² Interview with Christopher Hernandez-Roy, Senior Fellow and Deputy Director, Americas Program, Center for Strategic and International Studies, August 2023.
- ⁸³ See, for example, interview with Nate Grubman, political scientist researching Tunisian politics, June 2023.
- ⁸⁴ See, for example, interview with a Nicaraguan human rights defender, August 2023.
- ⁸⁵ Noel Pérez Miranda, “Ortega quita apellido a hijos de exreos políticos desterrados; a otros les niega entrega de pasaporte [Ortega removes last names from children of exiled former political prisoners; others are denied passports],” *Artículo 66*, March 4, 2023, <https://www.articulo66.com/2023/03/04/ortega-quita-apellido-hijos-exreos-politicos-desterrados-niega-entrega-pasaporte/>. See also interview with a Nicaraguan human rights defender, August 2023.
- ⁸⁶ Interview with a scholar focused on Tanzania who requested anonymity, August 2023.
- ⁸⁷ Ibid.
- ⁸⁸ “Despojan de nacionalidad y derechos ciudadanos, y confiscan a 94 nicaragüenses [Ortega strips 94 Nicaraguans of nationality and citizen rights],” *Confidencial*, February 16, 2023, <https://confidencial.digital/nacion/despojan-de-nacionalidad-y-derechos-ciudadanos-y-confiscan-a-94-nicaraguenses/>; US Department of State, “Sanctioning Three Nicaraguan Judges Involved in Depriving Nicaraguans of Their Basic Right to Citizenship,” April 19, 2023, <https://www.state.gov/sanctioning-three-nicaraguan-judges-depriving-nicaraguans-of-their-basic-right-to-citizenship/>.
- ⁸⁹ Interview with a Nicaraguan human rights lawyer who requested anonymity, August 2023.
- ⁹⁰ Interview with a Venezuelan civil society leader, August 2023.
- ⁹¹ Interview with Christopher Hernandez-Roy, Senior Fellow and Deputy Director, Americas Program, Center for Strategic and International Studies, August 2023.
- ⁹² Alfredo Romero, “The Repression Clock: A Strategy Behind Autocratic Regimes,” *Wilson Center Latin American Program*, July 2020, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Repression%20Clock_final.pdf.
- ⁹³ Interview with a Tanzanian civil society actor who requested anonymity, July 2023.

-
- ⁹⁴ Organization of American States, “Nicaragua: IACHR and REDESCA Express Concern About Violations of Property and Social Security Rights,” April 14, 2023, https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2023/061.asp.
- ⁹⁵ Interview with a Nicaraguan journalist, July 2023.
- ⁹⁶ Interview with Radwan Masmoudi, president of the Center for the Study of Islam and Democracy, August 2023.
- ⁹⁷ See, for example, interview with Jesús Tefel, Nicaraguan activist, July 2023.
- ⁹⁸ Interview with Akarachai Chaimaneekarakate, advocacy lead for Thai Lawyers for Human Rights, August 2023.
- ⁹⁹ Interview with Berna Akkızal, executive director and cofounder of the Civic Space Studies Association, August 2023.
- ¹⁰⁰ Inter-American Commission on Human Rights, “Nicaragua: Concentration of power and the undermining of the Rule of Law,” October 25, 2021, https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/2021_nicaragua-en.pdf.
- ¹⁰¹ Inter-American Commission on Human Rights, “Persons Deprived of Liberty in Nicaragua,” October 5, 2020, <http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Nicaragua-PPL-en.pdf>.
- ¹⁰² UN Human Rights Council, Report of the independent international fact-finding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/48/69 (December 28, 2021).
- ¹⁰³ UN Human Rights Council, Report of the independent international fact-finding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/45/33 (September 25, 2020).
- ¹⁰⁴ Gareth H. Jenkins, “From Politicization to Monopolization? The AKP’s New Judicial Reforms,” *Turkey Analyst* 4, no. 3 (February 7, 2011), <https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/247-from-politicization-to-monopolization?-the-akps-new-judicial-reforms.html>.
- ¹⁰⁵ Freedom House, “Turkey,” in *Freedom in the World 2023*, <https://freedomhouse.org/country/turkey/freedom-world/2023>.
- ¹⁰⁶ Nöemi Lévy-Aksu, “Turkish Constitutional Court rules that the convictions of Academics for Peace violate their rights,” London School of Economics and Political Science Department of Gender Studies, January 2020, <https://www.lse.ac.uk/gender/news/2020/Turkish-Constitutional-Court-rules-that-the-convictions-of-Academics-for-Peace-violate-their-rights>.
- ¹⁰⁷ Amnesty International, “Tunisia: President’s moves to shut down High Judicial Council pose grave threat to human rights,” February 8, 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/tunisia-presidents-moves-to-shut-down-high-judicial-council-poses-grave-threat-to-human-rights>.
- ¹⁰⁸ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Tunisia: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert,” July 15, 2022, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/tunisia-presidential-decrees-undermine-judicial-independence-and-access>.
- ¹⁰⁹ Human Rights Watch, “Tunisia: President Intensifies Attacks on Judicial Independence,” February 27, 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/02/27/tunisia-president-intensifies-attacks-judicial-independence>.
- ¹¹⁰ Interview with a former Tunisian political prisoner who requested anonymity, July 2023.
- ¹¹¹ Interview with a representative from the Center for Defenders and Justice, July 2023.
- ¹¹² Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Thailand: UN rights expert concerned by the continued use of lèse-majesté prosecutions,” February 6, 2017, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/02/thailand-un-rights-expert-concerned-continued-use-lese-majeste-prosecutions>; “Compare civilian and military courts when dealing with lese majeste cases,” Prachatai, December 3, 2014, <https://prachataienglish.com/node/4554>.
- ¹¹³ İnsan Hakları Ortak Platformu, “21 July 2016-20 March 2018 State of Emergency in Turkey: Updated Situation Report,” April 17, 2018, https://www.ihop.org.tr/en/wp-content/uploads/2018/04/SoE_17042018.pdf.
- ¹¹⁴ Turkey Tribunal, “Mass Dismissals of Judges and Prosecutors in Turkey of Post-Coup Period,” April 21, 2022, <https://turkeytribunal.org/actuality/mass-dismissals-of-judges-and-prosecutors-in-turkey-of-post-coup-period/>.
- ¹¹⁵ “Tunisia Cuffs Two Former Judges,” Voice of America, February 13, 2023, <https://www.voaafrica.com/a/tunisia-cuffs-two-former-judges/6960771.html>.
- ¹¹⁶ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Tunisia: Judges’ right to association and protest must be respected, say UN experts,” September 14, 2022, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/tunisia-judges-right-association-and-protest-must-be-respected-say-un>.
- ¹¹⁷ See, for example, interviews with Christopher Hernandez-Roy, Senior Fellow and Deputy Director, Americas Program, Center for Strategic and International Studies, August 2023; Tamara Taraciuk Broner, Rule of Law Program Director for Inter-American Dialogue, August 2023; and Franz von Bergen, Venezuelan journalist, June 2023.

¹¹⁸ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Venezuela: UN expert condemns further sentence against Judge Afiuni, says clearly act of reprisal,” March 26, 2019, <https://www.ohchr.org/en/news/2019/03/venezuela-un-expert-condemns-further-sentence-against-judge-afiuni-says-clearly-act>.

¹¹⁹ “Clash between Constitutional and appeals courts raises concerns over rule of law in Turkey,” Associated Press, November 9, 2023, <https://apnews.com/article/turkey-high-courts-clash-imprisoned-lawmaker-2df7ced7045f80bb843858969c3a02f8>; Media and Law Studies Association (MLSA), “Constitutional crisis - Can Atalay Controversy in the Judiciary,” November 9, 2023, <https://www.mlsaturkey.com/en/constitutional-crisis-can-atalay-controversy-in-the-judiciary>.

¹²⁰ UN Human Rights Council, Detailed findings of the independent international factfinding mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/48/CRP.5 (September 16, 2021); interview with a Tanzanian civil society actor who requested anonymity, July 2023.

¹²¹ Human Rights Watch, “Venezuela: Implement Inter-American Court Ruling,” September 20, 2011, <https://www.hrw.org/news/2011/09/20/venezuela-implement-inter-american-court-ruling>.

¹²² Amnesty International, “Tanzania: Withdrawal of individual rights to African Court will deepen repression,” December 2, 2019, <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/12/tanzania-withdrawal-of-individual-rights-to-african-court-will-deepen-repression/>.

Board of Trustees

* Denotes members of the Executive Board

President

Michael J. Abramowitz

Co-Chairs

The Hon. Jane Harman*
Wendell L. Willkie II*

Vice Chair

Goli Ameri*
Peter Bass*

Treasurer

Robert Keane*

Secretary

Cater Lee*

Trustees

Carol C. Adelman*
Sewell Chan
Michael Chertoff*
Carole Corcoran
Deborah A. Cowan
Rodger Desai
Martin Etchevers
Mathea Falco
David L. Fogel
Francis Fukuyama
Jonathan Ginns
Mark Goodman*
Dionisio Gutierrez
Nina Jacobson
Thomas Kahn*
Conrad Kiechel

Rachel Kleinfeld*
Howard Konar
Felix Maradiaga
Sharon S. Nazarian
Lynn Novick
Sushma Palmer
Maurice A. Perkins
Bill Reichblum
Collin Roche
Ian Simmons*
Thomas Staudt*
Reed V. Tuckson
Robert H. Tuttle
Joseph Votel
Norman Willox*

We are proud to partner with individual philanthropists, foundations, corporations, NGOs, and governments who share our values and tireless pursuit of democracy and freedom. Join us in this critical work. For more information about supporting Freedom House, **please visit** www.FreedomHouse.org/donate.



Freedom House is a nonprofit, nonpartisan organization that works to create a world where all are free. We inform the world about threats to freedom, mobilize global action, and support democracy's defenders.

1850 M Street NW, 11th Floor
Washington, DC 20036

freedomhouse.org
[facebook.com/FreedomHouseDC](https://www.facebook.com/FreedomHouseDC)
[@freedomhouse](https://twitter.com/freedomhouse)
202.296.5101
info@freedomhouse.org